

# Una paz armada\*

Libardo González\*\*  
Universidad Central,  
Universidad Nacional

El Plan Colombia está concebido como un punto vital en la estrategia del gobierno de Estados Unidos contra la droga. El paquete de ayuda, que ronda los US \$1.600 millones, estaría acompañado de otro de la Unión Europea para el logro de los mismos objetivos. Pero, mientras la ayuda de Estados Unidos tiene un carácter belicista y pretende el desmonte total de los cultivos ilícitos, en Europa el gobierno colombiano defiende como prioritaria la consolidación del proceso de paz con la guerrilla.

Aunque está definido que el 80% de la ayuda de Estados Unidos se ofrece en el campo militar, tanto el gobierno colombiano como el de Estados Unidos han extendido las consideraciones a otra áreas, entre ellas la económica, la fiscal y financiera, la de paz, la de defensa nacional, la judicial y de derechos humanos, la de lucha contra el narcotráfico, la de desarrollo alternativo, la de participación social, la de desarrollo humano y la de orientación internacional. Áreas que, en realidad, aparecen rellenas el objetivo primordial.

Este objetivo es geográfico y político. Su espacio geográfico es el Putumayo y todo el sur de Colombia. Los dólares están medidos en equipos militares que incrementarían la capacidad del ejército colombiano en el combate contra la fuerzas comprometidas con el narcotráfico. Sin embargo, por la zona en la que se pretende aplicar y por el centro de ataque contra las fuerzas que operan allí, no es necesario hacer un gran esfuerzo para entender contra quién van dirigidas.

Las implicaciones que tiene este paquete de ayuda para Colombia, en la medida en que proviene de Estados Unidos y constituye una decisión unilateral de su gobierno, van más allá de un simple refuerzo de la capacidad militar del ejército colombiano contra la insurgencia.

El Plan Colombia está concebido para llevar a cabo una guerra prioritaria contra la guerrilla y los cultivos ilícitos, pensados en forma complementaria. No apunta a colocar el flagelo de los cultivos ilícitos en un escenario más complejo, en el que juegan otros actores diferentes de la guerrilla que tiene su base en la Amazonía y la Orinoquía. Hacia allá va dirigida toda la tecnología y el equipamiento militares de este plan de ayuda.

A sabiendas del carácter directo de los planes de Estados Unidos con respecto de la zona andina, se puede convenir en que existe un

\*Tomado del periódico *UN*, de la Universidad Nacional de Colombia, No. 9, Bogotá, 9 de abril de 2000, en homenaje a quien siempre se interesó por la suerte de su país.

\*\*Economista, ensayista y humanista, Libardo González, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Central, murió en marzo de 2000.



propósito claro de obtener una victoria sobre los nuevos enemigos, en forma contundente, y sin tapujos. Por esa razón, se considera que si se logran erradicar esos cultivos, a cualquier costo, la batalla contra el narcotráfico estará asegurada en un buen porcentaje. En consecuencia, no se tienen en cuenta los demás actores, ni las demás zonas en las que la coca se procesa y se envía al exterior.

La erradicación de cultivos ilícitos tiene que pasar por un dispositivo militar, que se inserta obligatoriamente en el conflicto interno del país, creando un desbalance en el actual equilibrio de fuerzas. De esta forma, las negociaciones con las Farc quedan comprometidas por los operativos militares que significarán el debilitamiento de sus columnas fundamentales y de su base social. El paquete de ayuda contempla la provisión de 570.8 millones de dólares para la estrategia de Desarrollo Alternativo, en el que se registran 342.5 millones de dólares para proyectos de producción y transferencia de tecnología; 100 millones para infraestructura en áreas rurales; 86 millones para la reconstrucción y conservación de áreas ambientalmente frágiles y 42.3 millones para apoyar el desarrollo de las áreas indígenas.

### Quitar el agua al pez

Para cualquier intérprete, el Plan Colombia reconoce la necesidad de un desplazamiento de amplios sectores sociales, de campesinos y colonos, que tendrán que trasladarse a las zonas urbanas. En el Plan se sostiene que estas tierras de cultivos ilícitos se encuentran ubicadas en zonas de muy bajo rendimiento agrícola. Por esa razón, después del paquete de ayuda militar, se da mayor importancia a la reubicación de los desplazados.

También es éste un objetivo militar, pues se trata de aplicar una política complementaria de la que lleva a cabo el paramilitarismo, que ejecuta masacres y desplazamientos sin asumir la responsabilidad de las víctimas. Aquí se diseña un programa de incentivos a los campesinos para que abandonen la zona, sin prejuicio de ser sometidos a fuertes bombardeos si permanecen en ella. En suma, es lo que en la guerra fría se llamó "quitar el agua al pez".

El proceso de paz se haría en medio de la guerra, tal como está concebido. Pero el cambio en los pesos específicos de los contendientes no estaba previsto en la agenda del Caguán. Al variar éstos, varía también el talante de la negociación y la agenda arriesga convertirse en un expediente oficioso de una negociación que se hará en el recuento de bombarderos desplegados en las selvas y los ríos por donde se supone la existencia de siembras y rutas del narcotráfico.

Los demás objetivos planteados, como el de acelerar la extradición, dar un paso definitivo

en la conformación del sistema acusatorio a través de la Fiscalía y disminuir el déficit fiscal, son enunciados del Plan como aditamento necesario de la guerra que se acrecentará, de ser aprobados los rubros consignados en el Plan.

### Urge un viraje

Las implicaciones que tiene este paquete de ayuda para Colombia, en la medida en que proviene de Estados Unidos y constituye una decisión unilateral de su gobierno, van más allá de un simple refuerzo de la capacidad militar del ejército colombiano contra la insurgencia. Pretenden variar la dinámica que se llevó a cabo en El Salvador y Guatemala, en donde Washington decidió el proceso de paz y forzó a los militares a asumirlo. Aquí, más bien se apresta a bloquear un proceso de paz en curso, para decidir la suerte del país en un escenario de guerra.

Con lo anteriormente dicho, llegan a nuestra memoria las palabras de Robert McNamara en la Conferencia Anual del Banco Mundial de 1991, cuando decía: “Uno de los efectos más importantes que tiene el gasto militar, y que tiene serias implicaciones en el desarrollo político y económico, es el grado al cual fortalece la influencia política de las fuerzas armadas a expensas de los grupos civiles dentro de la sociedad. En muchos países en desarrollo, los sistemas económicos funcionan primariamente en beneficio de un número relativamente limitado de gente, y los sistemas políticos son frecuentemente manipulados para garantizar la continua dominación de la élite. Si el desarrollo se implementa para satisfacer las necesidades de todos los grupos sociales, es vital una distribución relativamente equitativa de los recursos. Esto, a su turno, reposa en un sistema

político que permite a todos los grupos participar y es capaz de diseñar compromisos viables entre intereses en competencia. Mientras mayor sea el poder político de las fuerzas de seguridad del Estado, menos probable es que la gobernabilidad democrática se pueda desarrollar. Sin duda las fuerzas de seguridad no protegen a una mayoría de la población amenazada por una minoría que busca sus propios objetivos económicos y políticos; más bien buscan garantizar la seguridad del régimen militar”<sup>1</sup>.

A continuación, el señor MacNamara señalaba algo que viene al canto sobre lo que representa el Plan Colombia, y la reflexión que debe hacer el Congreso de Estados Unidos antes de conceder la ayuda solicitada: “El papel de los militares es prerrogativa de cada gobierno. No obstante, la comunidad internacional necesita identificar las formas que debe adoptar para premiar a los gobiernos que reduzcan los gastos militares como señal de que se han alterado las prioridades a favor del desarrollo”<sup>2</sup>.

Nos parece que en este momento las admoniciones del señor MacNamara, otrora secretario de defensa del presidente Johnson y ex gerente de la General Motors, títulos que no lo acreditan para figurar en alguna lista de “apátridas” o “subversivos”, resultan de una atinada oportunidad para medir el significado que tiene el incremento de los gastos militares en una sociedad ya bastante agobiada por la guerra. Alterar estas prioridades y volcar los recursos hacia el desarrollo, antes que pretender eliminar a un enemigo que crece con cada dólar de nuestras reservas o de la ayuda exterior, se convierte en un urgente viraje que deben dar tanto el gobierno de Colombia como la comunidad internacional, si quieren contribuir a la paz de Colombia.

<sup>1</sup>Ver *Proceedings of the World Bank*, Annual Conference on Development Economics, World Bank, Washington, 1999, p. 107.

<sup>2</sup>Ibidem, p. 107.